

Un país no resuelve la violencia escolar únicamente con pórticos o revisando mochilas

El crimen que estremeció al país y concluyó con la muerte de una inspectora y otros lesionados al interior de un establecimiento educacional reabre un debate urgente: justicia, salud mental y el abandono silencioso que viven muchas comunidades educativas frente a la neurodivergencia.

Por Cynthia Paredes

Lo ocurrido en Calama no solo estremeció a una comunidad escolar. Remeció a todo Chile. Una inspectora perdió la vida en un lugar que debería ser sinónimo de resguardo, formación y confianza. Otras personas quedaron heridas. Y con ello volvió a instalarse una pregunta tan urgente como incómoda: ¿qué está pasando con nuestros jóvenes, con nuestras escuelas y con nuestra capacidad de prevenir el dolor antes de que se vuelva irreversible?

En medio de la conmoción, comenzaron a circular antecedentes de salud mental del presunto agresor, estudiante de Cuarto Año de Enseñanza Media. Y ahí aparece un riesgo que como sociedad no debíamos cometer: convertir diagnósticos en sentencia moral. Que un joven tenga trastorno del espectro autista, depresión mayor o crisis de pánico no explica por sí solo un crimen de esta magnitud. Mucho menos autoriza a instalar la idea de que la neurodivergencia o el sufrimiento psíquico sean equivalentes a violencia.

Pero tampoco podemos irnos al otro extremo y usar la salud mental como una cortina que borre la gravedad de lo ocurrido. Aquí hay una vida arrebatada, víctimas, dolor, y una comunidad devastada.

Chile necesita justicia, pero también necesita comprensión. Y ambas cosas no son excluyentes. Sin embargo, si esta tragedia no nos obliga a mirar lo que venimos arrastrando hace años, entonces no habremos aprendido nada.

Hace tiempo se viene señalando que los establecimientos educacionales no cuentan con las capacitaciones necesarias para que los profesores puedan

abordar el acompañamiento que requieren niñas, niños y jóvenes con diagnósticos de neurodivergencia. Muchos docentes, con toda la vocación del mundo, enfrentan realidades complejas sin herramientas suficientes, sin apoyo especializado constante y, muchas veces, sin redes que los respalden.

También, hay padres y madres que no cuentan con el acompañamiento necesario para entender, procesar y aceptar el diagnóstico de sus hijos. No por falta de amor, sino por falta de orientación, de contención y de espacios donde puedan aprender sin sentirse juzgados.

A esto se suma otro problema silencioso, pero igual de grave: gran parte de la comunidad escolar -padres, apoderados e incluso estudiantes- no ha profundizado en el significado real de los diagnósticos asociados a la neurodivergencia. Y cuando no hay conocimiento, lo que aparece es el prejuicio. El estigma. El aislamiento. Y ese aislamiento, cuando se acumula en el tiempo, puede transformarse en algo mucho más profundo que una dificultad académica o social.

No puedo dejar de recordar la vez que un director de un establecimiento educacional me dijo: "sus hijas son unas afortunadas al poder llegar a su hogar y que su madre las esté esperando con almuerzo y les pueda preguntar cómo les fue, ya que la realidad, señora Cynthia, es que el 80% del curso llega a casa y no hay madre ni padre que les converse sobre su día o cómo pueden ayudarlos. Y, aun así, muchos se quedan tranquilos tras pasando toda la crianza a los establecimientos educacionales, lo cual no corresponde". Esa frase, dura pero real, revela una verdad incómoda: la escuela no puede reemplazar a la

familia. Puede acompañar, contener, educar. Pero no puede -ni debe- asumir sola el rol emocional que comienza en el hogar.

No basta con reaccionar proponiendo más control de acceso, pórticos o revisiones. Un país no resuelve la violencia escolar únicamente revisando mochilas. También debe revisar abandonos. El abandono emocional, el abandono institucional y el abandono de la salud mental infantojuvenil.

Este caso obliga a Chile a hacerse varias preguntas a la vez. La primera es judicial: si estamos frente a un imputado penalmente responsable o a una persona cuya condición mental exige otro tipo de respuesta del Estado. La segunda es educativa y social: cuántas señales se están perdiendo hoy dentro de los colegios y las familias. Y la tercera, quizás la más incómoda, es cuánto hemos normalizado el malestar profundo de nuestros jóvenes.

Calama no necesita simplificaciones. Necesita verdad. Necesita justicia. Pero también necesita que esta tragedia no sea utilizada para estigmatizar diagnósticos ni para instalar miedos.

Porque cuando el debate se llena de etiquetas, se vacía de humanidad. Hay crímenes que obligan a castigar. Hay contextos que obligan a comprender. Y hay tragedias, como esta, que nos obligan -como sociedad- a hacer ambas cosas, sin mirar hacia el lado.

